

Autonomía energética

Los recientes temporales que azotaron a gran parte del país, afectando gravemente a comunidades rurales con cortes prolongados de energía eléctrica, han dejado en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético actual. Estos eventos han abierto un necesario debate en torno a la necesidad de impulsar una política pública que fomente la creación de organizaciones comunitarias para el desarrollo de proyectos de generación propia de energía con fuentes renovables, particularmente eólica y solar, en zonas rurales.

Uno de los principales argumentos a favor de esta política radica en la descentralización del suministro eléctrico. La dependencia de los sistemas tradicionales de postación, gestionados por empresas distribuidoras bajo un modelo centralizado, ha mostrado sus limitaciones a la hora de enfrentar situaciones de emergencia. De hecho, hubo comunidades que debieron esperar casi dos semanas para que el servicio fuera repuesto, principalmente por la demora en instalar las nuevas postaciones. Al propiciar la generación propia de energía, las comunidades rurales tendrían mayor capacidad para enfrentar contingencias climáticas, reduciendo el impacto de los cortes de suministro y asegurando una mayor autonomía.

El desarrollo de proyectos comunitarios de energía limpia podría traer beneficios económicos y ambientales significativos. Por un lado, se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a las metas de mitigación del cambio climático que Chile ha adoptado en diversos acuerdos internacionales. Por otro lado, la implementación de estos proyectos podría

generar un impacto similar a las iniciativas de agua potable rural (APR), que han llevado el recurso hídrico a miles de habitantes del campo chileno a través de la organización comunitaria y el financiamiento público.

Sin embargo, existen desafíos considerables para materializar algo. El financiamiento y la sostenibilidad económica de estos proyectos pueden ser un obstáculo. Aunque el Estado podría asumir un rol clave en la inversión inicial, la operación y mantenimiento de las instalaciones requieren un nivel de organización y gestión que no todas las comunidades rurales están preparadas para asumir. La capacitación técnica y la supervisión de las instalaciones también serían cruciales para dar seguridad y eficiencia de los sistemas.

La posibilidad de avanzar hacia un modelo que propicie la generación propia de energía en las comunidades rurales de Chile es una oportunidad para repensar la relación entre el Estado, la ciudadanía y los recursos energéticos. Incluso, se puede explorar un sistema mixto que permite la generación propia y la opción de surtirse de la red, tema que está normado en una ley pero en la que poco se ha avanzado hacia un uso mayor.

Si bien los desafíos son grandes, la experiencia de los proyectos de agua potable rural demuestra que, con el apoyo adecuado, las organizaciones comunitarias pueden jugar un rol crucial en la provisión de servicios esenciales. En un contexto de creciente vulnerabilidad climática, impulsar una política pública que promueva la generación local de energía no es solo una cuestión de autonomía, sino también de justicia social y sostenibilidad ambiental.